

No permitamos que se cancele el futuro

La decisión de la SEP de suspender el proceso de evaluación de los maestros de forma indefinida es como si el piloto de un avión apagara uno de los motores, justo después de despegar. El avión ahora va en picada. Los pasajeros son nuestros niños y jóvenes. En el avión que cae va nuestro futuro.

“Las malas noticias se dan en viernes”, dicen los que saben de comunicación. Y vaya cubetada de agua fría que recibimos los mexicanos el pasado viernes 29 de mayo. Con tres renglones mal redactados, la Secretaría de Educación Pública suspendió indefinidamente la aplicación del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los profesores de primaria, secundaria y bachillerato. Es como si el piloto de un avión apagara uno de los

motores justo después de despegar. El avión ahora va en picada. Los pasajeros son nuestros niños y jóvenes. En el avión que cae va nuestro futuro.

Apenas unos días antes de esta terrible noticia, en mi intervención en el Séptimo Foro de Seguridad y Justicia, recordaba los elementos que hicieron posible la reforma al sistema de justicia penal en 2008: la suma de las voluntades de la sociedad civil, la academia, el gobierno federal y los legisladores. Y decía yo en ese evento que, precisamente por ello, “no habría pecado más grave que abandonar la reforma de justicia a su suerte, porque dejaríamos a la deriva la aplicación de la ley, la justicia y la seguridad. La reforma penal se tiene que implementar al 100 por ciento en todo el país, sin excusas, sin dudas y sin regateos”.

Hoy parece que la reforma educativa ha sido abandonada a su suerte con excusas, dudas y regateos. Los ciudadanos no hemos recibido una explicación razonable de por qué el gobierno tomó esta decisión, pero la lógica apunta a que la amenaza de violencia el día de las elecciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue suficiente para que se diera marcha atrás a esta reforma fundamental. La señal que se manda es ominosa: cualquier grupo organizado puede, por la fuerza o la amenaza de ella, amedrentar al Estado mexicano y hacer que el gobierno viole flagrantemente la Constitución con tal de llevar la fiesta “en paz”. Como lo ha expresado Claudio X. González, ¿qué nos hace pensar que el gobierno no puede cambiar de opinión en la implementación de la reforma energética, la de telecomunicaciones o la de transparencia y combate a la corrupción? Sin duda, esta decisión afectará a un gobierno que, paradójicamente, necesita fortalecer su credibilidad hoy más que nunca.

Yo estoy convencido de que la suspensión de la evaluación de los profesores afecta nuestra lucha por la seguridad y el Estado de derecho en muchas formas. Menciono tres que son relevantes:

Uno, porque si queremos hacer de México un país de leyes, el gobierno debe ser precisamente el primero en cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus ordenamientos jurídicos. Un gobierno que viola la Carta Magna a capricho, que negocia la aplicación de la ley, que da marcha atrás con criterios políticos y no legales, pierde fuerza para hacer que el resto de la sociedad cumpla con sus obligaciones legales.

Dos, porque sabemos que en la economía moderna, recibir una educación de calidad amplía las oportunidades de trabajo e ingreso para los jóvenes. En una sociedad justa, todos los estudiantes deben tener acceso a una educación pareja en calidad para acceder a las mismas posibilidades de progreso. Permitir que grupos violentos descarrilen la reforma educativa es cancelar el futuro de miles, tal vez millones de mexicanos que ven irse meses y años de su vida con su escuela cerrada y con profesores de baja calidad. ¿Cuántos jóvenes no han preferido sumarse a las filas de la criminalidad antes que seguir siendo víctimas de un sistema educativo que no le dará ninguna posibilidad de tener un ingreso digno?

Y tres, porque la educación es una de las herramientas indispensables para reconstruir el tejido social, tan dañado por la inseguridad y la violencia. Un país seguro es aquel en el que los niños y los jóvenes tienen acceso a oportunidades de educación de calidad, que les permitan desarrollar su potencial como seres humanos. Un país seguro es aquel donde los niños tienen un libro, y no un arma, en la mochila. Por el contrario, un país en el que los niños ven a sus maestros bloquear calles, incendiar automóviles, atacar instalaciones gubernamentales, atacar policías y rayar monumentos para lograr lo que quieren, es un país condenado a reproducir patrones de violencia y desprecio por la ley. Sobre esa base, es imposible construir un Estado de derecho eficaz.

¿Qué hacer? No podemos quedarnos cruzados de brazos. Yo soy un convencido de las

palabras de Albert Einstein cuando decía que “La vida es muy peligrosa, no por lo que hacen las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa”. Las organizaciones de la sociedad civil no vamos a sentarnos a ver lo que pasa. Hay que apoyar, en especial, las acciones emprendidas por Mexicanos Primero. Les pido entrar a su [portal](#) para firmar la petición al gobierno a fin de que no se cancele la reforma educativa. Tenemos que movilizar la energía y la voluntad de la sociedad para defender esta reforma, que no es del gobierno: es de todos los mexicanos, particularmente de los niños y jóvenes. Cancelar la reforma educativa sería cancelar nuestro futuro. No lo permitamos.

[@Alejandro_Marti](#)